

¿En qué momento se jodió México?

Claudio Albertani

Fabiana Medina

*México, sitio de encuentro de la humanidad entera,
vieja liza de conflictos raciales y políticos de toda especie.*

*México es el mundo, o el jardín del Edén
o ambas cosas a la vez.*

México es paradisiaco e, indudablemente, infernal.

Malcom Lowry

*Las más diferentes mixturas, las levaduras más opuestas
se dejan hervir y borbollar en la caldera de ese absolutismo
sui generis y de vez en cuando provocan una explosión.*

*En México puede suceder todo, pero su fondo es tenaz,
y tiene una dialéctica tenaz, aunque para nosotros
casi incomprensible, increíblemente capciosa.*

Emilio Cecchi

En memoria de Marc Tomsin (1950-2021),
amigo entrañable e interlocutor ineludible

Introducción

El texto que sigue fue originalmente publicado por entregas en los números 310, 311 y 312 (mayo, junio y verano de 2021) de la revista francesa *Courant Alternatif* y en italiano en el *Quaderno* n° 1 de la revista *Collegamenti*, nueva serie. Ahora lo proponemos en español esperando que nuestro propósito, abrir un debate sobre las razones del desastre social que vive México, resulte claro.

A lo largo del siglo XX e inicios del presente, el régimen político mexicano pasó de ser una dictadura perfecta, según la caracterizara Vargas Llosa, a la alternancia de tipo gatopardista: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), autoproclamado heredero de la Revolución Mexicana, gobernó 71 años de 1929 al 2000, el derechista Partido Acción Nacional (PAN) de 2000 a 2012 y nuevamente el PRI de 2012 a 2018. La izquierda política representada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) logró gobernar a partir de 1997 la capital del país y algunas otras entidades, y aun cuando logró cambios significativos en lo social, entró en un proceso de decadencia acelerada siendo incluso partícipe de crímenes de estado.

Argumentamos que un hito de esa barbarie que consideramos un punto de quiebre para México fue la conversión de los aparatos represivos del estado que protagonizaron la guerra sucia contra las guerrillas y los movimientos sociales de los años sesenta y setenta del siglo pasado, en cuerpos de apoyo de las mafias ligadas al narcotráfico con el conocimiento y beneplácito de las agencias del Estado en los años ochenta, en colaboración con agencias internacionales como la CIA, ya que el resultado de ello fue la transformación de esas intermediarias mafias locales en empresas transnacionales de envergadura tal que han carcomido las estructuras políticas, económicas, financieras y sociales.

Lejos de ser un rezago del pasado, o una consecuencia del “atraso económico”, lo anterior expresa de manera especialmente cruda los impulsos destructivos y absolutamente “modernos” del capitalismo realmente existente. Y es que el problema de la corrupción, la criminalidad y la arbitrariedad de los poderes políticos y económicos no es una prerrogativa de México. Es un asunto que concierne a la humanidad entera. Si en el siglo XX, dichos impulsos se cristalizaban en los distintos totalitarismos, hoy se despliegan en la funesta compenetración entre Estado y bandas criminales.

En el caso de México, pensamos que, a pesar de las muchas expectativas que suscitó en su momento, el actual gobierno de centroizquierda, presidido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no ha podido cambiar las cosas. La estrategia para enfrentar a las mafias del narcotráfico brindando apoyos a los jóvenes y los más vulnerables para evitar su ingreso a la criminalidad no ha sido suficiente frente a organizaciones que despliegan un poder financiero y de fuego de enormes proporciones. Por otra parte, la violencia ha continuado cobrando la vida de periodistas, ecologistas, campesinos y maestros. En 2020, fue asesinada una mujer cada dos horas y media y en los primeros cinco meses de 2021, los feminicidios aumentaron 7,1%. Al cumplirse los tres años de su victoria electoral de 2018, AMLO debió reconocer que los feminicidios se han incrementado en su gobierno.

Un aspecto inquietante es la acelerada militarización. Como documenta Gilberto López y Rivas en el diario *La Jornada* (20 de agosto de 2021), a pesar de las promesas de campaña de regresar los soldados

a sus cuarteles, el 11 de mayo del 2020, se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación que asigna a las fuerzas armadas las tareas de seguridad pública. Al mismo tiempo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó un aumento presupuestal de 19,71% para la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en 2021 (El Economista, 8 de septiembre de 2020). ¿Con qué objetivo? Convertirla en un actor económico de primer nivel. En la actualidad, la SEDENA tiene a su cargo megaproyectos como la construcción de cuatro aeropuertos y tres tramos del Tren Maya (con la correspondientes ganancias, una vez terminados los trabajos), nuevos cuarteles de la Guardia Nacional y 2.700 sucursales del Banco del Bienestar (el banco de desarrollo del gobierno), con todo y equipamiento de cajeros automáticos. A lo anterior hay que añadir la entrega a la Secretaría de Marina del control de aduanas marítimas y terrestres, así como de los puertos del país. Ningún gobierno anterior había logrado semejante involucramiento de los militares en la vida pública del país.

Un punto a favor del gobierno de AMLO: la versión local de la dictadura sanitaria que actualmente se despliega a nivel mundial es bastante benévola y particularmente si la comparamos con la “Macronie” de Francia o con la Italia de Draghi, donde se amenaza con quitar el sueldo a los maestros no vacunados. Paradójicamente, el viajero que llega al país procedente de Europa queda favorablemente impresionado por la relativa libertad que encuentra en este México que tanto duele por otras razones.

Sea como fuere, el país sigue siendo un laboratorio de resistencias y la última parte de nuestro texto propone un balance de las luchas sociales de las últimas décadas. Subrayamos el aporte de los neozapatistas, sin callar las críticas que consideramos necesarias. Se verá que luchas hay y muchas. El problema principal es que se encuentran aisladas y desligadas entre sí. Están por verse los resultados de la gira zapatista en Europa con el objetivo de articular las bolsas de resistencia en México y en el mundo.

Recordamos que las redes de complicidad (no únicamente de solidaridad) que el EZLN había construido en los años noventa del siglo pasado eran impresionantes. En la actualidad –y por una variedad de razones que intentamos analizar– se encuentran muy lejos de tener la presencia y la vitalidad que mostraron entonces. Por otro lado, el EZLN se topa con la dura realidad de Chiapas, donde las comunidades indígenas viven una nueva oleada de persecución por parte de grupos paramilitares en Aldama, Chenaló y Nuevo San Gregorio, entre otros lugares. Se registra asimismo la aparición de nuevos grupos armados como las llamadas “Autodefensas del pueblo El Machete”, aparecidas los primeros días de julio en Pantheló y, aparentemente, sin relación con el EZLN.

Así las cosas, y cuando se cumplen 83 meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, sin que hasta ahora se haya aclarado su paradero, el futuro del país se antoja sombrío.

Claudio Albertani y Fabiana Medina
Ciudad de México, 26 de agosto de 2021

Hace más de medio siglo, Mario Vargas Llosa empezó *Conversación en la Catedral*, una de sus novelas más célebres, preguntándose “en qué momento se había jodido el Perú”. Se refería a la tenebrosa dictadura del general Odría (1948-1954) y, si bien sería erróneo comparar al Perú de entonces con el México actual, la pregunta circula con insistencia en la prensa y en redes sociales: ¿en qué momento se jodió México? Puede que sea una exageración, pero el hecho de que la pregunta se formule no deja de ser sintomático. Lo cierto es que, a pesar de las expectativas generadas en 2018 por la victoria electoral del candidato de centroizquierda, Andrés Manuel López Obrador –popularmente conocido como AMLO–, el país no sale de la crisis económica, social, cultural, ecológica, humanitaria y ahora también sanitaria en la cual lo han sumido décadas de gobiernos neoliberales.

Ese año, más de 30 millones de mexicanos (una cantidad mayor a la que obtuvieron todos los otros candidatos juntos) votaron, contra la riqueza obscena de unos pocos, el empobrecimiento acelerado de los demás, la corrupción desenfrenada y una violencia criminal que no es exagerado definir apocalíptica. Pero también le apostaron a un supuesto proyecto alternativo de nación, pomposamente llamado “Cuarta Transformación” o “4T” –las tres anteriores serían la Independencia, la Reforma y la Revolución–, que, sin romper con la dominación capitalista, buscaría democratizar al Estado y convertirlo en promotor de una economía, por así decirlo de rostro humano. Se prometía, también, respetar los derechos básicos –empezando por el derecho a la vida– y poner fin a la añeja complicidad entre gobierno, empresarios y crimen organizado. Tres años después, el proyecto se estrella contra la dura realidad de un país devorado por problemas que se antojan irresolubles en el presente cuadro institucional.

1. El crepúsculo del corporativismo

Sin regresar a los tiempos de la conquista –una de las grandes catástrofes en la historia de la humanidad–, o de la colonia, cuando Alexander von Humboldt escribía sobre la terrible desigualdad imperante en la Nueva España, ni a las muchas revoluciones derrotadas y traicionadas que marcan su historia, el origen del colapso que vive el México actual puede ubicarse en la década de los ochenta del siglo pasado. Es en aquellos años cuando, a partir de un conjunto de circunstancias aparentemente desligadas entre sí, el país empezó a encaminarse inexorablemente hacia la desastrosa situación en la que se encuentra ahora. Pero ese panorama funesto era imprevisible apenas unos años antes.

En 1976 el entonces presidente José López Portillo afirmaba que México debía acostumbrarse a “administrar la abundancia”. En efecto, el país vivía un auge sin precedente de su industria petrolera desde que fuera nacionalizada en 1938. Un contexto internacional favorable, debido a que en 1973 la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPEP) negó la venta de petróleo a Estados Unidos y demás países que apoyaron a Israel en la Guerra de Yom Kipur, provocó un importante

incremento en el precio del petróleo y convirtió a México en el proveedor por excelencia del crudo a Estados Unidos. Pero además, se descubrían en el país nuevos yacimientos: Cantarell, en la Sonda de Campeche, se convertiría en uno de los más importantes en el mundo. México crecía a una tasa anual promedio del 8,4%. Sin embargo, un mal manejo de esa “abundancia” en la política interna, el endeudamiento excesivo para financiar la explotación de los yacimientos descubiertos y, principalmente, el fin del embargo petrolero de la OPEP con la consecuente caída del precio del petróleo y el incremento de las tasas de interés, marcaron el fin de esa efímera bonanza y el inicio de una espiral interminable de endeudamiento externo que no ha hecho sino crecer y que, actualmente, hipoteca el 52,3% del producto interno bruto.

Apenas empezaba la década de los 80 y el país se sumía en una crisis profunda. En 1981, el mismo presidente, ya sin rastro de entusiasmo, aseguraba su intención de “defender al peso como un perro”. Intención fallida, puesto que pocos meses después debió devaluar la moneda de 20 a 70 pesos por dólar y declarar una moratoria de pago. A partir de entonces, uno tras otro, los gobiernos que siguieron adhirieron al llamado *Consenso de Washington*, un paquete de reformas neoliberales impulsadas por instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que, entre otras cosas, consistía en privatizar las industrias públicas, liberalizar el comercio y la circulación de capitales, desregularizar los derechos laborales y reducir el gasto fiscal.

Aunque parezca extraño, fue la poderosa maquinaria corporativa surgida de las cenizas de la Revolución Mexicana y afinada en los años treinta por el presidente Lázaro Cárdenas (1934-40) la que facilitó la entronización del neoliberalismo en el país, hacia finales del siglo XX. Habría que precisar que –triste ironía– el proyecto cardenista iba en sentido contrario: eliminar las formas más virulentas de la explotación capitalista, ampliar el mercado interno y abrir paso a un capitalismo nacional. Era una utopía y se esfumó pronto, pero el peculiar sistema autoritario sobre el cual descansaba –ese que, con expresión poética, Octavio Paz definía “el ogro filantrópico”– había llegado para quedarse. El ogro era el todopoderoso presidente de la república que controlaba el partido de Estado (el Partido Revolucionario Institucional, PRI, fundado en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario) y ceñía con sus garras a la sociedad mexicana, repartiendo premios y castigos.

Las organizaciones obreras recibían atención especial. En 1931, se había promulgado una Ley Federal del Trabajo que derivaba directamente del fascismo y de la ideología corporativa de la colaboración de clases. Como en la Italia del duce, el Estado decidía cuáles sindicatos eran reconocidos y cuáles no, al margen de la voluntad de los trabajadores. Creadas entonces, las Juntas de Conciliación y Arbitraje establecían qué huelgas eran legales y las que serían reprimidas, una práctica que se extendió hasta la reforma laboral de 2019. En 1936, Vicente Lombardo Toledano, un personaje nefasto, de probada fe estalinista (fue uno de los perseguidores de Trotsky), fundó la Confederación de Trabajadores de México (CTM), misma que el pasado 24 de febrero cumplió su 85 aniversario. La nueva central llevaba como lema, “por una sociedad sin clases”, pero lo cierto es que resultó ser el principal instrumento de cooptación y control de la clase obrera, especialmente a partir de la gestión de su sucesor, Fidel Velázquez, zar del sindicalismo oficial durante más de medio siglo. Las plazas se vendían, se heredaban o se otorgaban de manera discrecional, en un contexto de corrupción desenfrenada.

Los mecanismos de explotación –algunos de los cuales siguen existiendo– se intensificaron al amparo de la CTM. Uno es el *outsourcing* o subcontratación: una empresa contrata a otra para realizar ciertas actividades complementarias (de limpieza, por ejemplo) con el fin de no cumplir con sus obligaciones laborales, despojar a los trabajadores de sus derechos e imponerles condiciones de trabajo

desfavorables. Otro es el de los contratos colectivos de protección patronal, arreglos de tipo mafioso que se dan en grandes cadenas comerciales, maquiladoras, restaurantes y hoteles. En este caso, sindicatos *fantasmas* a cargo de falsos dirigentes firman contratos colectivos a espaldas de los trabajadores y cobran cuotas mensuales a las empresas para evitarles molestias. Resultado de lo anterior es que México no ha tenido una sola huelga general en más de cien años. La última estalló a finales de julio de 1916, promovida por la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal (FSODF), que agrupaba a trabajadores electricistas, tranviarios y empleados de comercio.

Si bien hoy es una central en franca decadencia, hacia mediados de los años ochenta, el control que la CTM ejercía sobre el movimiento obrero se mantenía firme y la sumisión del PRI a las directivas del ejecutivo, también. Así las cosas, cuando, a partir de las presidencias de Miguel de la Madrid (1982-88) y, sobre todo, de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), un grupo de tecnócratas formados en universidades norteamericanas tomaron el control del gobierno, la maquinaria corporativa se ajustó a las nuevas políticas neoliberales, sin muchos problemas y sin percatarse de que estaban firmando su acta de defunción. El primer paso fue el llamado “Pacto de solidaridad económica” (1987) que, con la bendición de la CTM y bajo el pretexto de controlar la inflación, integraba en un mismo paquete un conjunto de políticas económicas de corte monetarista y neoliberal cuyo propósito último era contener los salarios y mermar la capacidad de respuesta de los trabajadores.

Siguió una verdadera orgía de privatizaciones, bajo la modalidad del “capitalismo de amiguetes”: teléfonos, bancos, ferrocarriles, fertilizantes, aeropuertos, minas, industrias siderúrgicas, líneas aéreas, industrias azucareras, autopistas, canales televisivos, aduanas... Y llegaron nuevos ogros, nada filantrópicos. Carlos Slim Helú, varias veces número uno en la lista *Forbes* de los hombres más ricos del mundo, logró obtener ese ranking, luego de haber comprado, en 1990, la hasta entonces empresa pública Teléfonos de México a un precio casi ocho veces por debajo de su valor y siendo beneficiado durante más de 20 años con el monopolio en la operación de llamadas de largas distancias nacionales e internacionales. Para 2012, la OCDE, en su “Estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México”, daba cuenta de lo que en la calle se sabía: que la empresa de Slim dominaba el 80% del mercado de telefonía fija y 70% de la telefonía móvil.

No es un caso aislado. En 2018, 14 de los 16 multimillonarios mexicanos enlistados en dicha revista se habían enriquecido en el sexenio de Salinas. El número dos era German Larrea de Grupo México, quien compró en 1990 la mina de cobre Cananea y luego se adueñó, entre otras, de la mina Pasta de Conchos, Coahuila, que fue el escenario, en 2006, de un terrible accidente en el cual perecieron 65 mineros. Una de sus propiedades, la mina Buenavista del Cobre, en el norteño estado de Sonora, vertió en 2014, 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, ocasionando el peor desastre ambiental en la región y uno de los peores en la historia del país.

Otros multimillonarios incluidos en esa lista son Alberto Baillères González y Ricardo Salinas Pliego. El primero de ellos es dueño de compañías de seguros, de las tiendas de lujo el Palacio de Hierro y de Industrias Peñoles, la segunda minera más grande de México y una de las más importantes del mundo en producción de plata. El segundo es propietario de las tiendas Elektra, dedicadas a la venta de muebles y electrodomésticos a sectores populares. A fines de los ochenta, dichas tiendas apenas lograban salvarse de la quiebra, pero Salinas Pliego adquirió en 1993 dos de los canales (el 7 y el 13) de la televisora pública Imevisión, a precios de ganga. A partir entonces, su riqueza no ha dejado de crecer, convirtiéndose después en dueño de bancos, empresas de internet y de telecomunicaciones, aseguradoras, casas de bolsa, etc.

2. Las metamorfosis de la guerra sucia

En su origen, el corporativismo mexicano aseguraba una (modesta) distribución de la riqueza, a la vez que garantizaba la paz social ejerciendo un control casi absoluto no solamente sobre las organizaciones obreras, sino también sobre la prensa y los medios de comunicación masiva. Funcionó –no sin contradicciones– durante décadas posibilitando que el país alcanzara un crecimiento económico sostenido, a pesar de la corrupción desenfrenada. No era, desde luego, la “dictadura perfecta” de que hablaba Vargas Llosa, porque siempre hubo oposición. El gobierno reprimía por igual las causas estudiantiles, magisteriales, ferrocarrileras o médicas, a la vez que organizaba fraudes electorales cuando era necesario. Había también oposición armada. Persistentemente reprimidos con lujo de violencia, los movimientos guerrilleros marcan con fuego el milagro económico del país. El gobierno mexicano los enfrentó con la tortura, la desaparición forzada y la muerte en la que se conoce como “la guerra sucia”.

Vale la pena evocar, aunque sea rápidamente, las características principales de esta modalidad especialmente funesta de acometida contra los pueblos. Marie-Monique Robin, ha mostrado que nació en las selvas de Indochina y en las calles escarpadas de Argel, a partir del intento de Francia por conservar sus colonias, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Fue cuando los militares del país galo se percataron de que el modelo clásico de la guerra, con un frente, dos bandos alineados uno contra el otro y soldados uniformados, no funcionaba contra los movimientos de liberación nacional. Estudiaron las obras de Mao (quien proclamó la República Popular de China el 1º de octubre de 1949) sobre la guerra popular y llegaron a la conclusión de que la información y no el armamento, era la clave para derrotar a ese enemigo escurridizo. Si, gracias al apoyo de la población, el Viet-Minh y el Frente de Liberación Nacional argelino, se movían como pez en el agua en el tejido social (Mao *dixit*), la conclusión lógica era que había que quitarle el agua al pez.

Puesto que no existía un ejército claramente identificable, el enemigo podía encarnarse en cualquier ciudadano. El blanco era ahora el enemigo interno, la “subversión comunista” que se encontraba en todas partes, sin uniforme y oculto en la sociedad. La victoria ya no dependía únicamente del armamento sofisticado o de la fuerza numérica del ejército, sino de la guerra psicológica y de la creación de un aparato de inteligencia eficaz. El factor clave era la información y para conseguirla era preciso practicar la tortura. Centros de detención clandestinos se crearon a la par de grupos paramilitares al margen de la legalidad.

En un primer momento, Estados Unidos prestó escasa atención al tema, pues no tenía especial interés en que Francia conservara su imperio colonial. Sin embargo, la situación cambió rápidamente, conforme se agudizaba la guerra fría y se incrementaba la cruzada contra el comunismo. El resultado fue que expertos franceses enseñaron las técnicas de la guerra contrarrevolucionaria a los norteamericanos y a una generación de militares latinoamericanos en la Escuela de las Américas, en Panamá y en Fort Bragg, Carolina del Norte. Todos sabemos que Francia fue derrotada primero en Indochina y luego en Argelia, lo mismo que los norteamericanos en Vietnam. Hay, sin embargo, una parte del mundo en la que la guerra sucia dio buenos resultados: América Latina, donde fue empleada con éxito en los países del cono Sur, Colombia, Guatemala y, por supuesto, México.

El ciclo de la guerrilla mexicana empezó la madrugada del 23 de septiembre de 1965, cuando 13 hombres, dirigidos por Pablo Gómez y Arturo Gámiz, intentaron tomar por asalto el cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua, donde se encontraban 125 soldados. Fueron exterminados, pero al poco tiempo y especialmente a partir de la matanza de Tlatelolco (2 de octubre 1968), se difundió entre las

organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles la convicción de que la lucha ya no podía ser pacífica. Surgieron decenas de organizaciones armadas, tanto en zonas rurales como urbanas. Destacan, entre muchas, la Liga comunista 23 de septiembre, las Fuerzas de Liberación Nacional, (antecedente del actual Ejército Zapatista de Liberación Nacional), la Unión del Pueblo, el Partido de los Pobres y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria

La represión estuvo a cargo de la siniestra Dirección Federal de Seguridad, una madriguera de torturadores adscritos a la Secretaría de Gobernación y del propio ejército que por entonces enviaba a sus oficiales a formarse a Estados Unidos. Es el caso, por ejemplo, del general Arturo Acosta Chaparro, clase 1942, egresado de Fort Bragg en 1970 como boina verde, quien se convirtió en uno de los principales responsables de la guerra sucia, primero en Oaxaca y luego en Guerrero. Como tal, encabezaba personalmente los interrogatorios y disponía de grupos paramilitares secretos con permiso ilimitado para cometer cualquier clase de abusos.

Así las cosas, hacia mediados de la década de los ochenta, casi todas las organizaciones político-militares habían sido aplastadas en una guerra no reconocida, aunque extremadamente violenta que, según cifras oficiales, dejó un saldo de casi 1.500 muertos, 15.000 detenciones ilegales, 1.421 casos de tortura documentados. 1.650 personas más fueron recluidas en cárceles clandestinas, 100 de las cuales fueron ejecutadas extrajudicialmente y 797 fueron desaparecidas. Otras fuentes proporcionan la cifra de 800 desaparecidos únicamente entre los militantes de la Liga 23 de Septiembre.

Lo que sucedió después explica, al menos en parte, la realidad actual. Y es que, una vez liquidado el enemigo interno, los aparatos represivos no se desmantelaron, sino emprendieron nuevos derroteros, dando lugar a una colusión del Estado con el crimen organizado. En 1985, Enrique Camarena, un agente encubierto de la DEA que se había infiltrado en el cartel de Guadalajara y gracias al cual se había logrado un importante operativo antidrogas, fue asesinado en aquella ciudad luego de ser cruelmente torturado. La DEA inició entonces la *Operación leyenda*, una de las más grandes investigaciones de la historia del narcotráfico. Si bien fueron rápidamente apresados dos importantes capos del narcotráfico: Rafael Caro Quintero y Ernesto *Don Neto* Fonseca Carrillo, las pesquisas continuaron varios años y los resultados fueron reveladores.

Es notorio que durante la presidencia de Ronald Reagan (1981-1989) la CIA apoyó al movimiento armado de la contra nicaragüense para derrocar al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Puesto que el congreso norteamericano había restringido los fondos para ese propósito, la CIA instrumentó una triangulación ilegal que consistía en vender armas a Irán –la famosa operación conocida como *Irán-contras*.

Menos conocido es que el mismo operativo incluía permitir el ingreso a Estados Unidos de droga –especialmente cocaína– procedente de Colombia y México, a cambio de que una parte de las ganancias se destinara a los movimientos armados contrarrevolucionarios en Centroamérica. Es así como los cárteles de la droga mexicanos de ser simples productores de marihuana y amapola se convirtieron en traficantes de cocaína y drogas sintéticas en gran escala, con el apoyo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la misma que había liderado la guerra sucia.

Hay otros hechos que es útil evocar. El 30 de mayo de 1984, Manuel Buendía, conocido periodista del diario *Excélsior*, fue asesinado en la Ciudad de México. Poco antes, había logrado recopilar datos sobre las actividades de contrabando de armas de la CIA y la relación que la agencia de inteligencia tenía con narcotraficantes de Veracruz. “Buendía contactó a José Antonio Zorrilla Pérez, jefe de la DFS, y le reportó toda la información que poseía. El periodista buscaba un consejo sobre cómo proceder, pero a cambio recibió la muerte.” En 2013, luego de 28 años de silencio, tres ex agentes de la DEA que

habían participado en la investigación de la *Operación leyenda* para encontrar la verdad sobre el asesinato de su compañero declararon a la revista *Proceso* que Camarena “no habría sido asesinado por Rafael Caro Quintero –capo que purgó una sentencia por ese crimen– sino por un agente de la CIA. La razón: el integrante de la DEA descubrió que su propio gobierno colaboraba con el narco mexicano en su negocio ilícito”.

Es así como, progresivamente, integrantes de los aparatos represivos que habían protagonizado la guerra sucia se “modernizaron” convirtiéndose en el vínculo orgánico del Estado con las organizaciones criminales, mismas que se instalaron en el corazón del sistema político y económico mexicano, ya no como anomalía, sino en toda regla. Lo anterior sucedía en plena desregularización económica neoliberal, algo que –como señala Carlos Fazio– les permitió invertir de forma masiva en la economía legal a través de sofisticados esquemas financieros. Este que podría llamarse el gran *reset* de la corrupción en México condujo a la formación de nuevas clases dominantes de extracción no burocrático-estatal (la vieja maquinaria corporativa), sino monetarista de mercado que, falta de reglas, cambió profundamente las relaciones entre economía y política.

3. La gran devastación

Uno de los hitos de la tragedia mexicana es, sin lugar a dudas, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés), el primero de enero de 1994. A partir de esa fecha, el país cambió radicalmente: las políticas neoliberales globalizadoras se hicieron sumamente agresivas, se privatizaron las tierras ejidales, el colonialismo interno se fue articulando más y más con el colonialismo internacional, mientras el gran capital devoraba las estructuras sociales y económicas preexistentes combinando la represión, con la cooptación y la corrupción.

A partir de entonces, la salud, la vivienda y las pensiones, de ser derechos conquistados, pasaron a ser servicios pagados, mientras la educación se mercantilizaba. Con la excusa de atraer capitales foráneos, se permitió que las empresas transnacionales actuaran sin mayor reglamentación, lo cual ocasionó severos deterioros ambientales y daños a la salud de la población. Al mismo tiempo, México se volvió el país con mayor proporción de obesos en el mundo.

Aumentaron los incidentes por negligencia –el último es el derrumbe de la línea 12 del metro de la Ciudad de México que causó 26 muertos y 80 heridos, el 3 de mayo pasado, con un gobierno supuestamente de izquierda– las explosiones en las fábricas, los derrames de productos tóxicos en los ríos y las actividades criminales, como el robo de combustible a Petróleos Mexicanos. La economía mexicana se convirtió en una fábrica de pobres, donde el narcotráfico pasó a ser la única opción para millones de jóvenes, sin acceso a la educación ni al trabajo

Dicha realidad, sólo se puede entender en el contexto internacional. En el mundo actual –no sólo en México–, la política en cuanto instrumento de mediación tiende a desaparecer. El capital reemplaza las bases sociales y naturales que le preexisten con formas de organización cada vez más sometidas a sus necesidades de valorización. El Estado, de ser el gestor rígido y autoritario de las relaciones sociales, se convierte en un administrador de negocios mortíferos. El estudio de dicho proceso evidencia el desgarramiento del tejido social, y la interacción entre empresas y Estado bajo la forma de pandillas criminales.

En este sentido, y contrario a lo que algunos creen, México no es un país particularmente atrasado; más bien expresa esta realidad de la manera más cruda y descarnada. “Quien no conoce México –escribe

Roberto Saviano— no puede entender como funciona la riqueza en el planeta. Quien ignora a México, no entenderá nunca el destino de las democracias transfiguradas por los flujos del narcotráfico. Quien ignora a México no encuentra el camino que distingue el olor del dinero, no sabe como el olor del dinero criminal puede convertirse en un olor ganador que poco tiene que ver con el tufo de muerte, miseria, barbarie y corrupción”.

El Mayo Zambada, jefe del Cártel de Sinaloa, la organización de tráfico de drogas más importante del mundo, con presencia en prácticamente 70 por ciento del planeta, lo expresa así: “trabajamos para el gobierno, nos traen a la carrera”. En el memorial escrito por su hijo, apodado “Vicentillo” y actualmente testigo colaborador del gobierno de los Estados Unidos, se lee que el 99 por ciento de la policía mexicana es corrupta y que los narcos no financian a un partido político en particular, sino a todos, “porque así si ganara el uno o el otro, la organización nunca perdía.” (ibídem, pp. 17 y 190).

El mismo documento nos entera de que el Cártel de Sinaloa dispone de aviones, tanquetas, submarinos, lanchas rápidas, barcos de pesca, autobuses, vagones de ferrocarril y una flotilla de coches blindados. Se relaciona, además con la crema y nata de la criminalidad mundial: la Ndrangheta de Calabria, la mafia albanesa, la rusa, las distintas mafias mexicanas de Estados Unidos, la mafia china y, claro está, los cárteles colombianos. Controla igualmente puertos, ferrocarriles y aeropuertos, a la vez que ha infiltrado a la banca, la industria petrolera y un número importante de empresas privadas nacionales y transnacionales, especialmente, aunque no exclusivamente, en los sectores agropecuario y de la construcción.

El Cartel de Sinaloa no está solo. Otras mafias casi igualmente poderosas como, por ejemplo, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), le disputan poder, negocios y territorios, a la vez que mantienen estrechas relaciones con empresas privadas, el ejército, y los gobiernos locales, estatales y federales. Algunas controlan el comercio de hierro con China, la exportación de aguacates y el trasiego de fentanilo (opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente) que proviene de Asia y que tiene como destino los puertos del Pacífico mexicano, entre otros negocios. Una investigación académica revela que hacia 2010, unas 3500 empresas tenían nexos con el narco. Otros cárteles, además de traficar drogas, administran el flujo de migrantes ilegales que buscan llegar a Estados Unidos, negocio en el cual ostentan una crueldad sin límites. Los sicarios registran, como buenos mercaderes, las tarifas que cobran, asignando a cada migrante pulseras de plástico de diferentes colores, según el “servicio” otorgado y el precio correspondiente. Los que no tienen pulseras son suprimidos sin piedad.

Un viajero valiente, Flaviano Bianchini, ha narrado su recorrido en el tren apodado “La Bestia”, por el mismo camino y en las mismas condiciones deshumanas que los migrantes. Cada año, unas 800.000 personas, en gran parte centro y sudamericanos —aunque últimamente también caribeños y asiáticos— tienen que cruzar México para alcanzar Estados Unidos. En el camino sufren extorsiones y violencia extrema. Aún así, unos 600.000 afortunados lo logran, pero unas 150.000 personas son secuestradas en el camino. Cinco, tal vez, 10.000 mueren víctimas de una muerte violenta o, literalmente, se las traga la tierra. Los demás —un buen número— son deportados. Las cifras precisas nadie las conoce puesto que, a menudo, las familias no se atreven a denunciar su desaparición. ¿Más datos? Una de cada seis mujeres es violentada y luego prostituida por los cárteles criminales. En un solo lugar, San Fernando, Tamaulipas, en 2010 fueron masacrados 72 migrantes y otros 193 en 2011. La última masacre sucedió el pasado 22 de enero, en Camargo, también en Tamaulipas, donde fueron hallados 19 cuerpos calcinados. Al poco tiempo, se supo que doce policías del estado estaban implicados en su asesinato.

Este contexto de violencia extrema y de contubernio entre Estado, criminalidad y gran capital

explica los eventos trágicos de los últimos años. Está, en primer lugar, la desaparición, la noche del 26 de septiembre de 2014, de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Señalamos que la ciudad de Iguala, teatro de aquellos trágicos eventos, se encuentra en el llamado “cinturón de oro”, una suerte de El Dorado mexicano, enclavado en una región de terrible pobreza. Guerreros Unidos, los Ardillos y los Rojos y otras bandas criminales controlan los sembradíos y el tráfico de marihuana y opio, pero operan en lugares donde se encuentran grandes empresas mineras como Gold Corp, a la sazón dueña de la mina de oro Los Filos, la más grande de América Latina, y Torex Gold que está en Cocula, de donde procedían los policías que secuestraron a los muchachos. En entrevista con un canal de noticias financieras de Canadá, un alto funcionario de Gold Corp, declaró cándidamente que la minera “tiene generalmente buenas relaciones con los narcos”.

La participación del ejército mexicano y de los tres niveles de gobierno en la noche de Iguala ha sido ampliamente comprobada. Recordemos, por otra parte, que el Estado de Guerrero fue la cuna de la guerra sucia en los setenta y es un territorio que los militares tienen cuadrículado y monitoreado desde entonces. Los principales responsables de las muertes y desapariciones forzadas de esa época, los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, fueron sucesivamente sentenciados por colaborar con el narcotráfico. En la actualidad, cuando la región es teatro de otra guerra, igualmente insensata y aún más mortífera, los mismos mecanismos se reproducen en escala ampliada. “Fue el Estado” gritábamos en octubre de 2014 en las calles de la Ciudad de México. Y era verdad.

Ayotzinapa no es un caso aislado. Han habido asesinatos masivos también en Tlatlaya, Estado de México (2014), donde 22 civiles fueron ejecutados por militares; en Tanhuato, Michoacán (2015), donde 42 civiles, supuestamente integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, fueron asesinados por policías federales y en Apatzingán, Michoacán (2015), donde los masacrados fueron 16. Esas y otras matanzas no se deben únicamente a la crueldad de quienes las perpetran. Guardan relación con lo que los economistas llaman acumulación por despojo: la expulsión y, cuando necesario, la eliminación bestial de las poblaciones asentadas en regiones económica o políticamente estratégicas. El filósofo camerunés Achille Mbembe menciona que en ciertas condiciones los estados pueden transformarse en máquinas de guerra. Una máquina de guerra –explica– actúa mediante capturas y depredaciones y puede alcanzar enormes beneficios a través de conexiones directas con redes transnacionales. La extracción y el pillaje de recursos naturales por las máquinas de guerra van juntos a las tentativas brutales de inmovilizar y neutralizar espacialmente categorías completas de personas.

Es precisamente lo que sucede en México. La “guerra contra el narco”, desatada por el gobierno de Felipe Calderón (2006-12) y continuada por el de Enrique Peña Nieto (2012-18) fue una guerra contra el pueblo mexicano, más que contra el narco. Ocasionó unos 250.000 muertos, por lo menos 61.000 desaparecidos y unas 346.000 personas desplazadas internamente, provocando una crisis humanitaria de proporciones anteriormente desconocidas. Su principal estrategia, el súper policía de Calderón, Genaro García Luna –hoy preso en una cárcel de Estados Unidos– trabajaba con el Cártel de Sinaloa, mientras que el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional de Peña Nieto y como tal responsable de la matanza de Iguala, fue detenido el 15 de octubre del año pasado en el aeropuerto de Los Ángeles, California, bajo la acusación de traficar miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana y de blanquear dinero del narcotráfico.

Habría que añadir –precisa Carlos Fazio– que la guerra contra el narco se inscribía en la tendencia hacia la militarización y la transnacionalización de la “guerra contra las drogas”, fabricada e impuesta por Estados Unidos en todo el continente, a la que se sumaba, ahora, como parte de un mismo paquete

de tipo contrainsurgente, la “guerra contra el terrorismo” en el contexto de lo que se llamó Plan Mérida. Este no era más que un remedo del Plan Colombia, implementado en 2000 por el gobierno de William Clinton, supuestamente con el objetivo de combatir el tráfico de drogas, pero en realidad para combatir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Hay más. Cuestionar o escribir sobre lo anterior puede costar la vida. De 2000 a la fecha (3 de mayo de 2021), se han documentado 138 asesinatos de periodistas en México (127 hombres y 11 mujeres) relacionados con su quehacer profesional. De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior de Enrique Peña Nieto y 18 en el actual, de Andrés Manuel López Obrador. Gran parte de las víctimas trabajaban en provincia, donde la connivencia entre órganos gubernamentales y criminales es más estrecha todavía y en ocasiones no hay más poder que el de los cárteles. Es el caso, por ejemplo, de Miroslava Breach y Javier Valdez, corresponsales del diario *La Jornada*, respectivamente en Chihuahua y Sinaloa, ambos asesinados en 2017.

4. Los feminicidios

Según datos oficiales, en México es asesinada una mujer cada dos horas y media. El primer semestre de 2020, que transcurrió marcado por el confinamiento a raíz de la Covid 19, registró el saldo más alto en asesinatos de mujeres en los últimos 30 años.

La violencia feminicida contra mujeres y niñas tiene una larga historia. El 23 de enero de 1993, se encontraron, en un terreno baldío de Ciudad Juárez, Chihuahua, los restos de una jovencita de 13 años que había sido previamente violada y estrangulada. Trágicamente, Alma Chavira Farel inauguraba la crisis del feminicidio en México. A la fecha, la ciudad fronteriza continúa siendo el municipio con mayor número de feminicidios en el país y más de 1.700 expedientes recogen esas historias de asesinatos. Aun cuando la violencia feminicida no ha hecho sino crecer en todo el país, los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez cometidos en la década de los 90 y 2000, continúan siendo el capítulo más aterrador por la saña, la sistematicidad y la impunidad que les rodeó y sus características resultan significativas para entender algunos de los mecanismos que articulan la violencia contra las mujeres.

Rita Segato, una de las primeras investigadoras del caso, distingue la violencia doméstica de la que se produce en el espacio público, al afirmar que “si al abrigo del espacio doméstico el hombre abusa de las mujeres que se encuentran bajo su dependencia porque puede hacerlo, es decir, porque éstas ya forman parte del territorio que controla, el agresor que se apropia del cuerpo femenino en un espacio abierto, público, lo hace porque debe, para mostrar que puede. En uno, se trata de una constatación de un dominio ya existente; en el otro, de una exhibición de capacidad de dominio que debe ser reeditada con cierta regularidad (...) Pero la producción y la manutención de la impunidad mediante el sello de un pacto de silencio en realidad no se distinguen de lo que se podría describir como la exhibición de la impunidad”.

Esa época coincide con el empoderamiento del narcotraficante Amado Carrillo como líder del Cártel de Juárez. Conocido como el Señor de los Cielos, Carrillo se convirtió en el principal distribuidor de cocaína a Estados Unidos, en los tiempos en que el hoy mundialmente conocido Chapo Guzmán era apenas un aprendiz. Como señala Anabel Hernández, Carrillo “jamás hubiera podido crear su imperio sin la ayuda de empresarios de abolengo, banqueros, militares, policías y políticos, incluyendo a expresidentes de la República y sus familiares. Esa red de vínculos es indisoluble, todos se unen en torno a un mismo interés: el dinero y el poder.”

Simultáneamente, Ciudad Juárez se volvió la bisagra de una tríada de desposesión. Las políticas antiinmigrantes se combinaron con la militarización para el control de la frontera con Estados Unidos y el establecimiento de maquiladoras que, al amparo del entonces flamante Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), empleaban (y emplean) grandes cantidades de mano de obra barata, principalmente mujeres jóvenes de origen rural. Casi todas eran migrantes internas que, a pesar de su precariedad, eran autónomas y trabajaban en empleos de los cuales los hombres eran desplazados. Es así como, en un ámbito social marcado por una profunda cultura machista, obreras pobres de entre 15 y 30 años, que circulaban en horarios y rutas previsibles por zonas baldías carentes de infraestructura básica y seguridad fueron las principales víctimas de los asesinatos.

“Es evidente que la continuidad de este tipo de crímenes por once años sin que su recurrencia sea perturbada –afirma Segato– requiere recursos humanos y materiales cuantiosos que involucran: control de una red de asociados extensa y leal, acceso a lugares de detención y tortura, vehículos para el transporte de la víctima, acceso e influencia o poder de intimidación o chantaje sobre los representantes del orden público en todos sus niveles, incluso federal.”

El 16 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia respecto al caso González y otras vs. México, conocido como el caso Campo algodonerero por el nombre del lugar donde aparecieron los cuerpos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez. Por primera vez en el mundo, se responsabilizaba a un Estado, el mexicano, por el feminicidio de tres mujeres a raíz de la falta de diligencia, la no prevención y, en general, por no haber brindado seguridad a las víctimas ante un contexto de asesinatos sistemáticos de mujeres.

Pese al reconocimiento parcial de su responsabilidad y el importante avance en materia de legislación de género a nivel nacional, el Estado mexicano en Chihuahua siguió demostrando, por decir lo menos, ineficacia para atender el problema: debieron pasar 8 años para que el congreso de Ciudad Juárez incluyera el tipo penal de homicidio por razones de género en la legislación y 10 para que le diera el nombre de feminicidio. Peor aún, de acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado de esa localidad, de los 40 feminicidios cometidos entre 2017 y 2019, sólo tres habrían recibido sentencia. Hasta el momento, la Alerta por Violencia de Género, un mecanismo de emergencia creado en 2012 para conjuntar acciones de todos los niveles de gobierno a fin de la violencia feminicida nunca ha sido activada en Ciudad Juárez.

En años recientes, muchos han sido los casos de feminicidios que han sacudido a la opinión pública, y que, reavivando la indignación, han vuelto a poner el foco en el creciente número de asesinatos de mujeres y niñas por razones de género. Aun cuando es imposible cuantificar el horror en cada una de esas historias, dos de ellas ejemplifican la terrible acumulación de violencias en el espacio doméstico evidenciando la inoperancia de un sistema institucional que, a través de la omisión, las posibilita de manera cómplice: el crimen contra Ingrid Escamilla y el de la niña Fátima, ambos sucedidos en el transcurso de la misma semana, conmocionaron a México.

El 9 de febrero de 2020, en el Norte de la Ciudad de México, Ingrid Escamilla, una joven de 25 años de clase media, fue brutalmente asesinada en la cocina de su hogar por su esposo Erick, de 46 años, quien luego de acuchillarla, quitarle la piel, diversos órganos y descuartizarla intentó tirar los restos al desagüe. Cuando los policías arribaron a la vivienda, a raíz de una denuncia, encontraron al asesino todavía ensangrentado. Uno de ellos filtró las fotos del cadáver de Ingrid, las cuales aparecieron publicadas en la primera plana de periódicos sensacionalistas y circularon en redes sociales, con lo cual se consumó un segundo atentado contra la víctima. Ingrid, quien había logrado concluir una maestría en

administración de empresas y era reconocida por sus allegados como una persona alegre y noble, había interpuesto, siete meses antes, una denuncia por violencia intrafamiliar que la Fiscalía declaró inexistente.

El 11 de febrero del mismo año, la niña Fátima Aldrighett Antón, de 7 años, desapareció en la Alcaldía Tláhuac, el Suroriente pobre de la Ciudad de México. Cuando su madre llegó a recogerla a la escuela, media hora después de la hora de la salida, la niña no estaba. Fue reportada por su familia al día siguiente. Cinco días después de la desaparición, sus restos fueron encontrados en una bolsa de basura con rastros de haber sufrido tortura extrema y abuso sexual. El hecho despertó una ola de indignación en los habitantes de la zona, muchos de los cuales conocían a la pequeña porque vendía dulces junto a su madre.

Mientras la familia peregrinaba por diferentes instancias gubernamentales que mostraron ineptitud para atender el caso, los vecinos organizaron la búsqueda, difundieron la foto de la pequeña y recurrieron a cámaras de casas y negocios cercanos. Obtuvieron, finalmente, la última imagen de la niña, que la mostraba a la salida de la escuela pública a la que asistía cuando era entregada, indebidamente, a una mujer.

La noche del 19 de febrero fueron detenidos los secuestradores: una pareja, Giovanna y Mario Alberto, de aproximadamente 29 años, con ocho años de convivencia y padres de tres hijos de edad cercana a la de la víctima. Según relatos de una familiar de los secuestradores, Mario Alberto le habría exigido a Giovanna que le consiguiera una “novia niña” o él tomaría a una de sus propias hijas. Giovanna entonces secuestró a Fátima a la salida de la escuela; la niña la conocía: la secuestradora y presuntamente coasesina, había vivido un tiempo en casa de la pequeña cuando huyó de Mario porque éste había intentado prenderle fuego y la madre de Fátima, solidariamente, le había dado albergue en su precario hogar.

De la vulnerabilidad que rodeaba a la niña Fátima las instituciones tenían antecedentes. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) de la Ciudad de México, reveló en esos días que desde 2015, cuando Fátima tenía 2 años, existía un expediente en el que se reportaba que la madre sufría problemas de salud mental y la familia vivía en una gran precariedad, sin embargo no se había actuado en ningún sentido. Anteriormente, en una de las sedes de atención territorial del programa Lunas de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Giovanna, la misma que después sería la victimaria de Fátima, había denunciado ser víctima de violencia intrafamiliar.

Como respuesta a estos y demás feminicidios, el 8 de marzo del 2020 congregó la más multitudinaria marcha del Día de la Mujer de que se tiene memoria: más de 30.000 mujeres de todas las edades, condiciones y tendencias exigieron justicia y un alto a los crímenes. Al día siguiente, uno de los diarios más influyentes en México encabezaba sus ocho columnas con el titular “Claman miles de mujeres: basta de impunidad”. Un año después, en cambio, el encabezado del mismo diario rezaba “Causa justa, violencia inaceptable”. En el contexto del confinamiento por la pandemia, la marcha del 8 de marzo de 2021 caminó entre 1.700 mujeres policías y arremetió contra las vallas metálicas que resguardaban el Palacio Nacional. El saldo fue de aproximadamente 81 lesionadas: 19 civiles y 62 policías, muchas de las cuales sufren, también, abusos y discriminación al interior de sus propias corporaciones.

La respuesta presidencial a este tema se ha movido entre la minimización, el desconocimiento y la paranoia. Imbuido de una visión idealizada de la familia, AMLO no ha sabido encontrar respuestas a la complejidad del problema, al que reduce a una consecuencia del neoliberalismo y a la pérdida de los valores tradicionales. En declaraciones durante las conferencias matutinas desestimó la veracidad del

90% de las llamadas telefónicas de emergencia realizadas por mujeres, atribuyendo a conspiraciones de la derecha la inconformidad sobre su actuar en temas de género. El último desencuentro con el movimiento feminista fue la férrea defensa que realizara del que fuera candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, sobre el que pesan denuncias por violación.

En febrero de 2020, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, propuso eliminar el tipo penal de feminicidio, incorporado al Código Penal en 2012 y reclasificarlo como homicidio agravado debido “a la dificultad para acreditarlo” y al incremento del 137,5% de ese delito. Las diputadas de todos los partidos debieron explicarle que el feminicidio se acredita con sólo una de las variables estipuladas y el retroceso que su desaparición del Código Penal significaría.

Así las cosas, en este México que es muchos Méxicos, en el que, un mismo año de 1993, inicia, en un extremo de la geografía, con la devastación feminicida en Ciudad Juárez y culmina, en el otro, con la proclamación de la Ley Revolucionaria de Mujeres Zapatistas, la realidad confronta al gobierno actual con sus propias políticas. A un año de que se declarara la pandemia, los feminicidios se han incrementado y el movimiento feminista tiene el reto de seguir avanzando y, al mismo tiempo, al decir de Marcela Lagarde, no reproducir estigmas y mecanismos que van a redundar en más violencia contra las mujeres.

5. Resistencias

México no es únicamente el lugar del mundo donde la devastación ambiental, las masacres, las ejecuciones extrajudiciales, el comercio sexual, la corrupción, las desapariciones forzadas y los feminicidios se dan de la forma tan terrible que hemos intentado resumir. Es también una advertencia y un recordatorio: si los humanos no nos decidimos a cambiar de rumbo, la catástrofe que viene será de proporciones bíblicas. Pero México es mucho más. Como lo han observado escritores, poetas y viajeros, y como lo saben sus habitantes, es también un laboratorio de resistencias, un sitio peculiar donde se dan cita las más diferentes utopías que, de vez en cuando, provocan explosiones y temblores sociales.

En este panorama abigarrado, los pueblos originarios ocupan un lugar destacado. Recordemos que las luchas que han librado para preservar sus modos de vida contra diferentes formas de explotación, opresión y dominación siempre han girado en torno a dos ejes: demandas legales para hacer valer sus derechos y periódicas rebeliones armadas. De alguna manera, la historia del último medio siglo reproduce dicho esquema en escala ampliada.

A partir de 1968, sectores urbanos, en gran parte estudiantes, docentes y clases medias, junto a obreros, indígenas y campesinos lucharon contra la dictadura del Partido Revolucionario Institucional por diferentes medios. Algunos se unieron a los movimientos insurgentes, algunos de los cuales se mantienen vigentes hasta la fecha como el EZLN y el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Otros participaron en distintas luchas (magisteriales, rurales, barriales, ecologistas, feministas...) siempre reprimidas con lujo de violencia, tanto en el campo como en las ciudades. Otros más participaron en la lucha electoral, cultivando la esperanza de una “transición” pacífica a la democracia representativa. Eran, en realidad, diferentes modalidades de una misma lucha y existían múltiples vasos comunicantes.

La guerra sucia originó diferentes reacciones. En 1977, nació el Comité Pro-Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, más conocido como Comité Eureka, que fundó la infatigable Rosario Ibarra de Piedra, madre de Jesús Piedra, integrante desaparecido de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Conocidas cariñosamente como “las doñas”, las madres, esposas, hijas, hermanas, familiares de las víctimas mantuvieron el dedo en la llaga durante más de cuarenta años

haciendo de la memoria una bandera de lucha: la memoria de los desaparecidos y también la memoria de sus desaparecedores.

Habría que añadir que esa lucha no ha terminado: “¡crimen de Estado!” y “¡Ni perdón ni olvido!” clamaron el 10 de junio pasado, en plena pandemia, los integrantes de diversos colectivos al manifestarse frente de la casa del expresidente Luis Echeverría (99 años cumplidos), uno de los mayores responsables de la guerra sucia.

A mediados de los ochenta, empezó a cobrar fuerza la lucha por el sufragio efectivo y el respeto al voto. El PRI siempre había cometido fraudes, pero, salvo casos aislados, solían ser alquimias locales con escasa proyección nacional. La ola de movimientos que surgió a raíz del temblor de 1985 en la Ciudad de México cambió radicalmente la situación. En 1986, dentro del partido oficial, surge una corriente que exige transparencia, democracia y regreso a las bases militantes en la elección de candidatos rumbo a las elecciones que se llevarían a cabo dos años después. Ideada por Porfirio Muñoz Ledo y encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas (hijo de Lázaro Cárdenas, el presidente más popular de los últimos cien años), la autodenominada Corriente Democrática Nacional, cuestionaba desde dentro el carácter autoritario y antidemocrático de ese partido y abría un boquete en las filas del PRI. Los reclamos culminaron con la expulsión de militantes y la formación, junto con los restos del Partido Comunista y de otras pequeñas organizaciones políticas, del Frente Democrático Nacional. En las elecciones de 1988, ganó su candidato, Cuauhtémoc Cárdenas, pero el triunfo le fue arrebatado por Carlos Salinas de Gortari, el candidato oficialista, quien sería el presidente más emblemático del neoliberalismo mexicano y, a la postre, el más odiado.

El del 88 fue el primero de una serie de fraudes masivos que se consumaron en las décadas siguientes, tanto en elecciones presidenciales como estatales y locales creando una suerte de trauma en el imaginario del pueblo mexicano. Eran los años del derrumbe del bloque soviético y la crisis de las guerrillas centroamericanas. Nació el Partido de la Revolución Democrática, PRD, continuación del Frente Democrático Nacional, un partido sumamente heterogéneo en el que desde el principio convivieron auténticos luchadores sociales con estalinistas y priístas reciclados. Lo cierto es que surgieron expectativas en torno a la viabilidad de la lucha electoral pacífica, una creencia que costó cientos de asesinados y otros tantos desaparecidos pues el PRI no estaba dispuesto a compartir el poder.

El panorama volvió a cambiar radicalmente, el primero de enero de 1994. Ese día, mientras en los círculos de la alta finanza se celebraba la entrada en vigor TLCAN, la mega máquina capitalista enfrentaba uno de sus periódicos tropiezos provocados por el fastidioso factor humano. Miles de indígenas mayas, hombres y mujeres con el rostro cubierto por pasamontañas armados de fusiles rudimentarios, irrumpieron en la escena política mexicana y en el mundo entero. Marginados del universo consumista, ausentes en las estadísticas, admitidos en la conciencia nacional sólo como vestigios arqueológicos o atracción turística, los mayas organizados en el entonces desconocido Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se levantaron para decir: “¡ya basta!”. Basta de miseria, basta de injusticia, basta de ceguera, basta de silencio.

El presidente Salinas desplegó una operación militar en gran escala para acabar con los rebeldes, mientras declaraba que era sólo una revuelta de indígenas “monolingües”, limitada a unos cuantos municipios del estado de Chiapas. Sin embargo, cientos de miles nos movilizamos por la paz en todo el país y el gobierno tuvo que cesar unilateralmente el fuego. Luego, por una paradoja típica del mundo actual, aquellos hombres y mujeres rebeldes se volvieron pronto el espejo no sólo de México, sino del mundo entero. Armados igualmente de ironía y de espíritu visionario, los mayas enarbolaban la bandera de una nueva democracia para todos que no tardarían en llamar “intergaláctica”.

Surgida en el momento culminante del neoliberalismo, la rebelión indígena de México anticipaba los movimientos antiglobalizadores del nuevo milenio y, al buscar renovar la acción política desde sus fundamentos, obtuvo una importante proyección nacional e internacional. Con casi tres décadas de actividad pública a cuesta, la contribución de los zapatistas a la creación de un mundo menos injusto y a la emancipación de los pueblos originarios es innegable. Textos como la “Declaración de la Selva Lacandona”, “De qué nos van a perdonar” (ambos difundidos en 1994) y muchos otros figuran entre los grandes documentos del Siglo XX junto a, por ejemplo, “Yo tengo un sueño” de Martin Luther King.

Precisamente por eso, el movimiento ha sufrido un fuerte desgaste y el embate de una guerra de baja intensidad que reproduce los esquemas de la guerra sucia de los setenta. Una guerra conducida por el ejército regular, pero también por grupos paramilitares que han cometido masacres tan crueles como la de Acteal (1997) y que siguen actuando impunemente en la actualidad como en el caso de los pobladores de Aldama que sufren las agresiones de la policía local y de un grupo armado de corte paramilitar de Santa Martha, municipio de Chenalhó. Es admirable que, a pesar de ello, los zapatistas hayan logrado resistir, convocar encuentros internacionales y generar sistemas propios de gobierno, educación y salud que han ganado simpatía y solidaridad en el mundo entero

6. La crisis del EZLN

Dicho esto, como en Rusia en 1917, como en España en 1936, y en Rojava hoy, la crítica libertaria no puede detenerse en el umbral de la solidaridad. El gran problema del EZLN es que ha elaborado un atractivo discurso libertario que no siempre coincide con la práctica, algo que se observa tanto en su dinámica interna como en sus relaciones con los colectivos de solidaridad en México y en Europa.

En los años noventa, algunos asumimos el compromiso de forjar esa “internacional de la esperanza”, a la cual se nos invitaba. El objetivo era abrir espacios que incluyan y no excluyan, donde todos aprenderíamos, donde nuestras aspiraciones y nuestras esperanzas acompañarían a la acción, donde todo sería para todas y para todos (Declaración de Berlín, junio de 1996). Por su parte, los zapatistas (Segunda declaración de la Realidad, agosto de 1996) nos convocaban a construir una red de resistencias, luchas y acciones contra el neoliberalismo, último y mortífero avatar del monstruo capitalista.

Nos movían sentimientos de solidaridad, pero no queríamos reproducir las viejas prácticas asistenciales tan comunes en la izquierda en donde la idealización del “indio” era la otra cara del racismo y en donde “donar” significaba aniquilar al otro, confinarlo en una situación de perpetua impotencia. Poniendo en relación comunidades libres que se expresan por medio de asambleas soberanas enriquecidas por un arco iris de intercambios y de nomadismos, las redes actuarían fuera y en contra de la política tradicional.

Los fundamentos de la acción se determinarían a partir de la práctica misma (“caminando preguntamos”) y en el juego de la construcción de una “ley común”. Con estas armas podíamos reconducir las decisiones hacia el único nivel que se puede controlar, el local. En resumidas cuentas, no se trataba únicamente de “solidaridad”, sino de apoyo mutuo, de un intenso ir y venir de ideas, personas y sinergias que acabaría enriqueciéndonos a todas y todos. El trayecto y la manera de caminar –se decía– eran tan importantes como la meta. Este principio era particularmente importante porque separaba la nueva manera de hacer política en el buen sentido del término de la politiquería de los partidos.

Un cuarto de siglo después, el balance no es del todo positivo. Un ejemplo entre muchos es la

ruptura del EZLN con el Colectivo de Solidaridad con la Rebelión Zapatista (CSRZ) de Barcelona, el mismo que, a partir de la masacre de Acteal había sido el principal animador de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), una de las instancias más eficaces contra la guerra sucia en México. El 15 de enero de 2009, el CSRZ informó públicamente de su autodisolución pues el EZLN le había notificado “la pérdida de confianza en la relación fraternal que hemos mantenido a lo largo de 15 años”. Igualmente lamentable fue el silencio al respecto de los colectivos involucrados en la solidaridad que conocían perfectamente la lealtad de los compañeros del CSRZ con respecto a la causa zapatista. Como consecuencia, la CCIODH dejó de existir.

No es un caso aislado. A lo largo de los años, múltiples testimonios señalan que los mandos del EZLN toman las decisiones políticas importantes, al margen de las asambleas y de los pueblos. Javi Herrac, un compañero anarquista que participó durante más de diez años en la construcción de la educación autónoma zapatista en la Zona Altos de Chiapas, señala que en las comunidades existe un arriba y un abajo. Los de arriba son los mandos políticos-militares que tienen la última palabra en las decisiones importantes, evalúan los proyectos y deciden si el trabajo de educación, salud, justicia, gobierno, etcétera va bien o mal. Según Herrac, no hay discusión fraternal, ni diálogo, ni reflexión común; tampoco asambleas en donde se pone a discusión una propuesta o una decisión política. Lo que hay es una autonomía autoritaria donde unos mandan y otros obedecen.

Giuseppe “Cippi” Martinelli es autor de un libro entrañable sobre su experiencia de más de 20 años como médico al servicio del EZLN, en donde no hace más que expresar entusiasmo y admiración por la lucha de las comunidades zapatistas, sin dejar de formular algunas (tímidas) críticas, cuando lo considera necesario. Aún así, fue “suspendido” de la clínica de Oventic pues la comandancia no aprobó su testimonio. Resultado: la clínica se encuentra cerrada desde 2018 y las comunidades perdieron un apoyo valioso. Y está, por otra parte, la voz del comandante insurgente Germán (Fernando Yáñez Muñoz), veterano fundador de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), el grupo que dio origen al EZLN, quien denuncia calumnias, agresiones y el desplazamiento forzado de que han sido objeto las comunidades afines a su grupo por parte de milicias zapatistas.

Aunado a lo anterior, el mensaje de los últimos comunicados se halla muy lejos del carácter épico de antaño. Lo que se aprecia, más bien, es una narrativa rayana en la frivolidad que elude poner sobre la mesa los problemas reales. Es en este contexto que se puede entender la última iniciativa, el viaje en velero de una delegación zapatista de Isla Mujeres, Quintana Roo a Vigo, Galicia, y sucesivamente a Madrid y otras ciudades de Europa.

Otro botón de muestra de la crisis del zapatismo son las elecciones de medio término celebradas el 6 de junio de 2021. Mientras que en Cherán y otras regiones indígenas de Michoacán, no se votó porque las comunidades no permitieron la instalación de las casillas electorales, la participación en las zonas donde se asientan las comunidades afines al EZLN fue mayor al 70 por ciento –muy por encima del promedio nacional que no rebasa el 52 por ciento– y el partido de gobierno obtuvo una rotunda victoria.

Habría que añadir que la política electoral de la comandancia ha sido más bien errática: cuando se celebró la Convención Nacional Democrática (agosto de 1994), la comandancia sostuvo la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. En 2000, siguió sosteniendo a Cárdenas, salvo luego otorgar el beneficio de la duda al ganador de la contienda, Vicente Fox, del derechista Partido Acción Nacional.

En junio de 2005, el EZLN dio a conocer la VI Declaración de la Selva Lacandona en que planteaba un plan nacional de lucha, una nueva constitución y se deslindaba de Andrés Manuel López Obrador, el candidato del PRD. En los meses siguientes, mientras Televisa –la principal empresa de comunicación de México– encabezaba la guerra mediática contra AMLO, la caravana de la Otra recorría las 32

entidades del país escoltada por la Policía Federal Preventiva. El 9 de mayo de 2006, semanas antes de las elecciones en las que Felipe Calderón del PAN se robó la presidencia gracias a un enésimo fraude, el subcomandante Marcos (hoy Galeano) ofreció una entrevista en hora pico a la mismísima Televisa. Sucesivamente, precisó que la OTRA no participaría en las movilizaciones contra el fraude.

En 2012, cuando se consumó otro fraude, esa vez mediático, a favor del priísta Peña Nieto, Marcos guardó un prudente silencio. Sin embargo, en 2018, el EZLN y el Congreso Nacional Indígena decidieron participar en las elecciones presidenciales con una candidata independiente, María de Jesús Patricia Martínez, “Marichuy”, que no pudo figurar en las boletas electorales, pues sólo obtuvo 281.955 firmas de apoyo, unas 600.000 por debajo de las necesarias. Recordemos, en contraste, que en 2001, la Marcha del Color de la Tierra para exigir que se reconocieran los derechos de los pueblos indígenas –un evento épico, comparable a la “Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad” de 1963–, convocó a un millón de personas tan sólo en el zócalo de la Ciudad de México.

7. Las contradicciones de Morena

¿Y qué decir de aquellos que, años atrás, habían optado por la lucha electoral y la supuesta transición a la democracia representativa? Hace mucho tiempo que el PRD, hoy reducido a la nada (3,6 por ciento en las últimas elecciones), se volvió un remedo del PRI. Pero tal parece que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) el partido creado en 2014 por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ex militante de ambos partidos, sigue los mismos pasos.

En 2018, López Obrador recibió un alud de votos que lo colocaron como el presidente más votado de la historia contemporánea de México. Su elección representó la culminación de las luchas del pueblo mexicano contra los fraudes electorales y no, como absurdamente afirmó el subcomandante Moisés del EZLN, el resultado de “treinta millones que no entienden la castilla”. Fue también la cristalización de la esperanza de esas personas que veían en él a una persona honesta capaz de dejar el camino de despojo y corrupción que habían transitado los anteriores gobiernos y reconducir el país por una senda de mayor equidad y justicia social. Hoy, tres años después, la popularidad personal de López Obrador continúa cercana al 60% y las elecciones intermedias del 6 de junio de 2021, calificadas como las más grandes de la historia por el número de gubernaturas, municipios y escaños en el congreso que se elegían, reafirmaron que, a pesar de un evidente desgaste, el partido en el gobierno sigue siendo la primera fuerza política.

Hubo no obstante una verdadera debacle de Morena en su bastión principal: la Ciudad de México. Además de ser el epicentro político y la vitrina nacional por excelencia, la Ciudad de México es pionera en varios temas. Ha sido, desde principio de los ochenta, el espacio donde se han gestado grandes movimientos: las huelgas universitarias, las movilizaciones de los damnificados por los sismos, el Movimiento Urbano Popular, las batallas para legalizar el aborto y los matrimonios homosexuales. Fue además la cuna de un sinnúmero de organizaciones por la defensa de los derechos humanos y el epicentro de debates sociales, culturales y políticos. Por todo ello, los partidos de izquierda (primero el PRD y luego Morena) han logrado gobernar la ciudad durante los últimos 24 años.

Sin embargo, el 6 de junio, se redujo la presencia del partido oficial a la mitad: en las 16 alcaldías que conforman la ciudad, Morena pasó de gobernar 14 a sólo 7. Los discursos del presidente, lejos de reflejar autocrítica alguna, se han basado en la estigmatización de una supuesta clase media egoísta que se deja manipular por las campañas sucias de la derecha. Es claro que muchos votantes capitalinos de AMLO en 2018, en 2021 no se sintieron representados por sus candidatos, varios de ellos reciclados

impresentables, ni tampoco aprobaron la gestión de las alcaldías salientes. La ciudad que logró conquistas y derechos sociales importantes a lo largo de los 24 años, acabó secuestrada por tribus clientelares sin vocación ni principios y ahora se encuentra en manos de una derecha todavía peor.

A nivel nacional, el actual gobierno ha centrado su quehacer en el combate a la corrupción y en la justicia social. Lo cierto es que la economía va mal desde antes de la pandemia. Los pobres se encuentran ahora más pobres y los ricos, más ricos. Según cifras oficiales, el número de los mexicanos que tienen ingresos inferiores al valor de la canasta alimentaria básica aumentó del 35,6 por ciento al 39,4 por ciento. Esto significa que 50.100.000 de personas no tienen con qué cubrir sus necesidades básicas. Del otro lado del espectro, 6 de cada 10 pesos de la riqueza nacional están en manos del 1% de la población. Los trece empresarios más poderosos del país, entre los cuales figuran Slim, Salinas Pliego, Larrea y Balléres —es decir, los que se enriquecieron en el sexenio de Salinas, han incrementado su fortuna, a pesar o tal vez gracias a la pandemia.

Por otro lado, si bien la política del gobierno busca beneficiar a poblaciones vulnerables, lo cierto es que afectan las pensiones de quienes han cotizado durante décadas. A lo anterior, hay que añadir que, a pesar de su vehemente retórica antineoliberal, el gobierno morenista emplea la más rancia austeridad monetarista, pues no ha dejado de reducir la inversión pública en los rubros de salud, educación e infraestructura. Aumentan, a la par, el monto de los subsidios a los pobres lo cual, exactamente como en los tiempos del PRI, no es más que un mero paliativo.

Con la creación en 2019 de la Guardia Nacional —heredera de los viejos cuerpos represivos, como la desaparecida Policía Federal Preventiva—, el gobierno de AMLO ha legalizado la permanencia del ejército en las calles, misma que había prometido detener cuando se encontraba en la oposición. Más de 90 mil uniformados patrullan ahora las calles del país y, además, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha convertido en una potencia económica de primer nivel. Además de ser dueña de bancos y de estar a cargo de varias obras de construcción, la SEDENA será propietaria del Tren Maya, el megaproyecto de carácter turístico, que cuestionan las comunidades indígena de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, a las afueras de la Ciudad de México.

Es importante recordar que, como ya señalamos, el ejército mexicano, además de represor, está involucrado en toda clase de escándalos: corrupción, tortura, desaparición de personas y, por supuesto, narcotráfico. Sin embargo, bajo la amenaza de crear un escándalo diplomático el gobierno de AMLO optó por rescatar al citado general Cienfuegos de las mazmorras norteamericanas para luego exonerarlo de toda acusación.

Por otra parte, se han impulsado más megaproyectos ecocidas como, por ejemplo, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la Refinería Dos Bocas, ambos impugnados por pobladores y grupos ecologistas. Algunos de dichos proyectos ya han cobrado víctimas. Samir Flores, connotado opositor al Proyecto integral Morelos —una termoeléctrica, un gasoducto que atraviesa más de 60 comunidades campesinas de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala y un acueducto para transportar 50 millones de litros de agua diarios del Río Cuautla que pertenecen a los ejidatarios de Ayala (el pueblo de Emiliano Zapata)—, fue asesinado el 20 de febrero de 2019, sin que hasta ahora se haya dado con los culpables.

Han perecido desde entonces otros defensores de los bosques y el patrimonio ecológico de México. Entre ellos recordamos a Fidel Heras Cruz, opositor a las hidroeléctricas Paso de la Reina y Río Verde (Oaxaca), asesinado a tiros el 21 de enero pasado; Marco Antonio Arcos Fuentes, comisario municipal del Jaleaca de Catalán (Guerrero), ejecutado el 21 de mayo; los líderes yaqui Agustín El Roque Valdez, Tomás Rojo Valencia y Luis Urbano Domínguez Mendoza, luchadores por la defensa del agua en el

norteño estado de Sonora, ultimados en diferentes fechas de los meses de mayo y junio y José Ascensión Carrillo Vázquez, que encabezó movilizaciones contra la mina de oro a cielo abierto Peñasquito –la más grande en América Latina, propiedad del consorcio estadounidense Newmont–, hallado muerto y con signos de tortura, junto a otras ocho personas el 5 de junio.

En el rubro del derecho de asilo, hay dos hechos ominosos que vale la pena mencionar. El 9 de octubre de 2020, fue detenido en Acapulco y entregado a las autoridades de Guatemala, César Montes, de 77 años, uno de los dirigentes históricos de la guerrilla de ese país. En junio de 2021, agentes del Instituto Nacional de Migración de México detuvieron en Tijuana a Christopher Doyon, un conocido activista hacker, colaborador de Wikileaks y de Anonymous y lo entregaron a las autoridades norteamericanas para que enfrente cargos que pueden mantenerlo décadas en la cárcel. Ambos habían solicitado asilo al gobierno mexicano en calidad de refugiados políticos.

8. A manera de balance

Desde nuestro punto de vista, el problema principal que enfrenta México es que se descarrilaron las múltiples vías sobre los cuales las luchas sociales habían marchado durante décadas. Si bien es verdad que la resistencia sigue e incluso aumenta en diferentes ámbitos de la vida política y social, también lo es que no hay suficiente comunicación, mucho menos interacción.

¿Qué le queda al pueblo mexicano? Abandonar la creencia en improbables redentores y apostarle a la autonomía individual y colectiva. El país está tocando fondo, pero no todo está perdido. El EZLN se mantiene como polo de resistencia y si se decide a abandonar sus prácticas autoritarias y excluyentes, podría volver a desempeñar el papel aglutinador que tuvo en el pasado.

Hay dos movimientos sociales que muestran una gran vitalidad: la red de colectivas feministas que, según creemos, podría ampliar sus horizontes hacia perspectivas más clasistas y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la disidencia magisterial que desde hace más de cuatro décadas es la oposición mejor organizada del país. Recordemos que en 2006, la Sección 22 de la CNTE, a través de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fue protagonista de la revuelta urbana más importante de las últimas décadas en América Latina: el gobierno local tuvo que huir y durante meses Oaxaca permaneció en manos del movimiento social. Si bien la CNTE se encuentra dividida porque una parte apoya a López Obrador, la disidencia magisterial le sigue ocasionando dolores de cabeza.

Por último, aunque no menos importante, existe regado por todo el país, un nuevo anarquismo, integrado principalmente por colectivos de jóvenes que participan en la solidaridad con los zapatistas, en movimientos estudiantiles, en actividades contraculturales y en la defensa del medio ambiente. Pero esta es otra historia y la contaremos otro día.

Abril-junio de 2021
Año dos de la dictadura sanitaria